

25 ANIVERSARIO

"O.K., SEPTIEMBRE"

FERNANDO GONZALEZ

QUERIDO Walter: no veo Chrysler; sólo Ford hace algo por la civilización". Era un lacónico telegrama de M. Rieber—presidente de la Texaco Incorporated— desde el frente del Ebro al presidente de la Chrysler, en 1938. En esos momentos, en la mayoría de los puertos "nacionales", se recibía carburante norteamericano para ayudar al Ejército de Franco en su campaña contra la Segunda República. Hace exactamente cuarenta años del inicio de la dependencia económica—el petróleo crea la verdadera dependencia— de los Estados Unidos.

Sin embargo, por evidentes razones de prestigio internacional, hasta 1953 no se firmaron los acuerdos que dieron origen al establecimiento de las actuales bases militares. Precisamente, el 27 de septiembre, fecha que, en 1975, sería considerada como de "cierre" del franquismo con las ejecuciones de tres miembros del FRAP y dos de ETA, en Madrid, Barcelona y Burgos. A partir de aquel 27 de septiembre de 1975 se inicia una breve y acelerada descomposición del régimen franquista. La clase política que lo había sostenido se mantiene en silencio, salvo excepciones. Una semana después, el 1 de octubre, aparece el GRAPO, que jugaría un decisivo papel en la transición.

Estamos en el vigésimo quinto aniversario de la firma de los acuerdos con Washington, y en el tercero de las últimas muertes del franquismo. Ambas fechas se unen. Y, para algunos observadores, en algo más que un detalle aislado. La preparación de la opinión pública para los próximos atentados (el famoso "comando ETA deambulando por Valencia", la muerte de un policía armado en Alava, además de otros tres heridos, el constante rumor de que se esperan acciones violentas contra las FOP e incluso contra las Fuerzas Armadas, etc.) es un hecho perfectamente detectable. A ello habrá que añadir la actitud de la Asociación Profesional del Cuerpo General de Policía, confirmando en sus cargos a los directivos y solidarizándose con los sancio-

nados. La rebeldía frente al ministro del Interior es ya descarada. Es parte del mecanismo "destabilización para la estabilización".

El *New York Times* aseguraba en un histórico editorial, en 1953, con motivo de la firma de los acuerdos que dicha firma "supondría el mantenimiento del dictador en el poder hasta su muerte, sin la oportunidad de que en España se ejercieran las libertades democráticas". La sentencia del influente diario neoyorquino indicaba, además de una clarividencia política sospechosa, que la política exterior norteamericana, perfectamente coherente con su pragmatismo habitual, prefería un dictador vitalicio que ensayara una "alternativa democrática" en la que se podía correr el riesgo de una contestación a la presencia militar norteamericana en España.

La deuda exterior española era, hasta mayo del presente año, de más de 15.000 millones de dólares—cada español, incluso los recién nacidos, debemos 400 dólares—, siendo el gran acreedor los Estados Unidos. Directamente, a través de los Bancos privados o indirectamente, mediante las grandes compañías internacionales. La deuda con el FMI (Fondo Monetario Internacional) aumenta incesantemente. En 1977 hubo que abonar cerca de 160.000 millones de pe-

setas en concepto de intereses de la deuda, es decir, casi el 40 por 100 de los ingresos que provienen de las exportaciones. Es la gran trampa que, lentamente, va minando la movilidad del país. Para algunos es el resultado de veinticinco años de dependencia económica, política y militar de los Estados Unidos.

Sin embargo, desde una óptica puramente política, parecería inaceptable que los aliados de la dictadura—Franco sería impenable sin la presencia norteamericana en España— lo sean también de la democracia. Los partidos políticos, incluidos los de izquierda, han evitado referirse directamente al problema norteamericano, lo que explicaría su escaso margen de maniobra. Era precisamente en el *New York Times* del pasado mes de julio donde Felipe González declaraba: "Los socialistas no tenemos intención de romper la cooperación entre los Estados Unidos y España, el tratado entre ambos países podrá renovarse en 1981 con la única condición de que se retiren de España todas las bombas atómicas norteamericanas". Felipe González se refería, sin duda, al peligro nuclear de Rota. Es sabido que la autonomía de los nuevos submarinos nucleares permitirá en un breve plazo dismantelar dicha base, trasladando la operatividad aérea, posiblemente, a Ca-

narias, donde se inician las obras de infraestructura para una gigantesca base. El líder socialista parece desconocer, o al menos soslayar, esta temática. El PCE, por su parte, reconoce que se va a llegar a la "desnuclearización de nuestro territorio aun manteniendo los acuerdos existentes con los Estados Unidos". Se limita a recomendar la no entrada en la OTAN.

El tratado de 1976 que confirma el acuerdo de 1960, prolongación a su vez de los de 1953, establece, según determinadas versiones, "cláusulas secretas". Nunca han sido negadas en su totalidad, aunque tampoco han sido expuestas. Hace un mes, el diario *TeleXprés*, con motivo del viaje del vicepresidente y ministro de la Defensa a Washington, recordaba que sólo tenía sentido si "lo que va a tratar Gutiérrez Mellado en Washington es alguna de las famosas y siempre desmentidas cláusulas secretas". Una de ellas pudiera ser la militarización de las islas Canarias.

En la presentación de las cartas credenciales del nuevo embajador español en Washington, José Lladó—yerno del artífice del pacto con los Estados Unidos, el ex ministro de Franco Manuel Arburúa—, Carter aseguró: "España es uno de los países de los que estoy más orgulloso, que tiene un Gobierno libre y democrático". Es el mismo país con el que las anteriores Administraciones norteamericanas firmaban acuerdos y entregaban—parcamente— créditos para el mantenimiento de la dictadura. Sería interesante medir el nivel de orgullo del pueblo español respecto a los Estados Unidos. Hay que constatar, sin embargo, un hecho. En radio y televisión—al menos en las oficiales— no se menciona nunca la existencia de bases norteamericanas en España. Sólo en la prensa—menos de un 30 por 100 de los españoles lee "alguna vez" prensa escrita—cabe esta mención. No es que esté expresamente prohibida en RTVE, es que no se hace.

Con la anunciada ola de violencia para las próximas semanas, se desorientará, una vez





Kissinger y Arellza firman el Tratado hispano-norteamericano de 1976, que confirmaba el acuerdo de 1970, prolongación a su vez del de 1953.

más, a la opinión pública. Se estabilizará o desestabilizará, según la óptica, pero sí es seguro que el proceso iniciado en 1938, confirmado en 1953 con la firma de los acuerdos, prorrogado por López Bravo en 1970, ampliado por Arellza en 1976, no va a desaparecer. España dependerá de los Estados Unidos, unilateralmente o a través de la OTAN, es el precio de una Historia perdida. Se puede jugar a "no hablar de ello, como si existiese una verdadera independencia nacional", técnica de los partidos de oposición, pero sólo es una comedia pobremente representada. Unas palabras de José Mario Armero, presidente de Europa Press, reflejan, sobradamente, este tipo de ficción política: "Mr. Todman —se refiere al nuevo embajador norteamericano— sustituye a un gran profesional de la diplomacia, Mr. Wells Stabler (1), que tuvo buen cuidado de no intentar intervenir o inter-

ferir en nuestros asuntos internos durante una etapa tan delicada. Fue una tarea difícil, tal vez en algunos momentos no bien comprendida, pero que hoy permite afirmar rotundamente que el cambio político es obra exclusivamente de los españoles".

En realidad, el "cambio político" se inició en diciembre de 1973 con la voladura del almirante Carrero Blanco, y continuó con la actuación del FRAP y la acción de la "Marcha Verde" —preparada bajo control directo de Henry Kissinger— y la reforma, aceptada en Washington. Había, naturalmente, la voluntad de cambio del pueblo español, pero eso ya era un hecho real varias décadas antes sin que surtiese efecto. Las próximas muertes y secuestros del otoño no harán más que confirmar, trágicamente, el cambio político controlado. España es un ejemplo exportable. Brasil será, posiblemente, el campo de operaciones donde se implantará el módulo español. ■

Los asesinatos de los antidemócratas

El lunes —cuando esta publicación estaba ya en la imprenta— caían dos muertos más de las Fuerzas Públicas: dos miembros de la Guardia Civil, en el barrio de Atocha, de San Sebastián. El sábado por la tarde había muerto otro miembro de las Fuerzas del Orden, un policía armado, en Vitoria, mientras dos de sus compañeros quedaban gravemente heridos.

El mismo lunes por la tarde comenzaba en el Senado el Pleno para el estudio final de la Constitución, y es imposible dejar de relacionar unos hechos con otros. El largo calendario de los asesinatos coincide siempre con fechas marcadas por un paso más en el lento camino de la creación de un orden democrático. Demasiado lento, y no dejaremos de culpar de esa lentitud, de la indecisión gobernante, a todos los intentos de lo que se llama "desestabilización", un vocablo mundial. Porque hay una ofensiva mundial contra las formas democráticas, concretamente contra las formas democráticas europeas, y de los países que las tienen de manera más precaria. Adoptarán una forma en Portugal y otra distinta en Italia. En España están adoptando ésta, forzada especialmente en el País Vasco, porque se sabe que es un punto sensible para todo el país. Como en el brote anterior, en el que los asesinatos se cumplieron a la misma hora, y contra el mismo frente de víctimas uniformadas, en Galicia, el País Vasco y Cataluña.

Es imposible que nadie ignore, ni parece aceptable que nadie finja ignorar, de dónde salen esos asesinatos. Tienen un carácter de provocación y están claramente dirigidos contra el proceso democrático. Lo saben los compañeros de los asesinados, lo saben sus mandos, no pueden dejar de saberlo quienes los comentan y muestran. Los asesinatos y el terrorismo no son fruto de la democracia, como se ha llegado a decir, sino que son precisamente actos concretos contra la democracia, con intención de evitar que llegue a implantarse de una manera oficial y definitiva. Fuera de lo oficial, fuera de los textos, la democracia está implantada ya en España, y ello de una manera irreversible. No pueden prevalecer estos actos, ni pueden incitar a nadie a reaccionar en el mismo sentido que los autores de los crímenes: actuando contra la democracia.

Señalemos, una vez más, el carácter especialmente odioso de esta forma de asesinatos, que se realizan indiscriminadamente contra cualquier miembro de las Fuerzas Públicas que vista uniforme, muchas veces al amparo del azar y sabiendo que las armas de defensa que estos guardias llevan consigo son prácticamente ineficaces contra el asesinato por la espalda o la sorpresa a la vuelta de una esquina.

No parece que las respuestas que se intentan desde el Ministerio del Interior y sus incesantes reuniones, ni las leyes especiales contra el terrorismo, hayan podido dar el menor resultado contra esta acción planeada. Tampoco fue la dictadura una respuesta: bajo ella se cometió uno de los más espectaculares actos de terrorismo de la historia del país, el que se llevó la vida del presidente del Gobierno, señor Carrero Blanco. La única respuesta clara es la de acelerar el camino constitucional y el desarrollo máximo de la democracia a partir de esa Constitución, que está costando ya demasiada sangre de inocentes: de rehenes de las fuerzas antidemocráticas, revestidas con diversas siglas, pero con una única y clara intención. No permitir que esa intención prevalezca es, por ahora, la defensa más visible. ■

(1) Ver TRIUNFO, 795, "España, caso cerrado".